

El sindicalismo argentino frente al Bicentenario: una reseña histórica

Arturo Fernández*

El sindicalismo ha sido y es un movimiento social esencial de las sociedades capitalistas porque constituye una necesaria expresión del conflicto entre el capital y el trabajo y contribuye a limitar los abusos de los propietarios de los medios de producción. Los sindicatos aparecieron en el siglo XIX como una forma organizada de lucha contra la arbitrariedad de los capitalistas. En muchos países generaron partidos políticos que representaron los intereses de los trabajadores y el proyecto de superar “el drama de la condición obrera”. Por ello, fueron proscriptos o reprimidos durante décadas, aún en los países industriales desarrollados. Después de la trágica Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero consiguió el sufragio universal, al tiempo que la constitución de la Organización Internacional del Trabajo posibilitó la progresiva universalización del Derecho Laboral que protegería al asalariado.

A través de la vía abierta por la difusión del sufragio universal, los sindicatos fueron ampliando el espacio de la ciudadanía hacia los derechos sociales y económicos, mediante la gradual concreción de pactos sociales que sentaron las bases del Estado de Bienestar democrático. La superación de la Gran Depresión de 1930, primera crisis mundial del capitalismo, facilitó el desarrollo de las negociaciones Empresas-Sindicatos-Estados, que afianzaron una real distribución de la

riqueza. La crisis de los años setenta condujo a un período de concentración del capital, de recortes de ese Estado de Bienestar y de debilitamiento del sindicalismo pero, ciertos principios esenciales de la convivencia entre el capital y los trabajadores se mantienen aún en los países desarrollados.

En la Argentina el desarrollo capitalista se asoció tempranamente con un contexto de dependencia económica estructural, dado que nuestro país se integró en el mercado mundial como productor especializado en abastecer de materias primas agropecuarias a los países industrializados, sobre todo a Gran Bretaña. En consecuencia, la lenta formación de un sector industrial en la Argentina, subordinado a los intereses de los terratenientes exportadores, influyó sobre el movimiento obrero y sus luchas e hizo difícil establecer pactos sociales con el capital, aún después de la crisis de 1930.

Al estudiar los caracteres específicos del sindicalismo en relación al contexto social y político que lo condiciona, se observa que están vinculados con el tipo de capitalismo que les tocó en suerte confrontar. Por eso, una breve reseña de la historia del sindicalismo argentino, en diversas etapas, cada una de las cuales ofrece caracteres definidos y divergentes unos de otros, nos permitirá ilustrar el supuesto general que guía nuestra interpretación acerca de que cada período significativo de la

* Investigador Principal CONICET/UBA/ UNSAM

Este análisis actualiza una serie de estudios realizados a lo largo de las cuatro últimas décadas e incorporada en ese período en diversas publicaciones.

historia sindical corresponde a un estado cualitativamente distinto del desarrollo capitalista argentino.

En el año del Bicentenario cabe resaltar el contraste en las organizaciones sindicales entre 1910 y 2010. Hace un siglo, las protestas de anarquistas y socialistas contra los salarios de hambre y las condiciones de trabajo inhumanas condujeron a la aplicación del estado de sitio durante las celebraciones del Centenario, convertidas en una muestra del autoritarismo oligárquico. Fueron enviados a la cárcel de Ushuaia decenas de militantes obreros detenidos. Había temor de violencia social y bandas para-policiales acechaban a los sindicalistas de todas las tendencias, al tiempo que se dictaba la Ley de Defensa Social, contraria a los principios liberales de la Constitución Nacional y se radicalizaba la paradójica Ley de Residencia, todo un símbolo del fracaso del proyecto inmigratorio de la Organización Nacional, usada para expulsar extranjeros “indeseables”. Los sectores dirigentes económicos y la Iglesia Católica consideraban una amenaza la existencia misma de los sindicatos.

En este año 2010, el 25 de mayo coincidirá con el séptimo año de una gestión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que restableció la negociación colectiva tripartita, mejoró el salario mínimo por decisión del Poder Ejecutivo y fortaleció indirectamente el rol de un sindicalismo cada vez más plural. Además, dio cobertura a dos millones de personas que no tenían aportes suficientes para jubilarse y una asignación familiar para los niños de los sectores vulnerables. La proyección política de los sindicatos es diversa y aceptada por los dirigentes políticos. En conjunto, esto contribuye a mantener altos niveles de paz social a pesar de la inédita situación de desempleo estructural, pobreza y exclusión social que aún vive la Argentina y que había llegado a porcentajes alucinantes en el 2002. Por ello, se puede afirmar que hubo ciertos avances sociales y, como resultado de prolongadas luchas populares, se refuerza la esperanza de lograr mayor justicia social.

Veremos ahora las seis etapas principales de esta historia.

■ Industrialización incipiente y predominio del sindicalismo “revolucionario” (1878-1919)

Este período se caracterizó por el predominio de los sindicatos anarquistas, cuya principal arma de combate fue la huelga “revolucionaria”. El reducido movimiento obrero, correspondiente a un desarrollo industrial incipiente, estuvo formado por inmigrantes influidos por las ideas anarquistas y socialistas europeas. Pero el anarquismo pareció encontrar más apoyo que el socialismo en los sectores autóctonos incorporados al trabajo industrial, numéricamente poco significativos. Así es que, al tiempo que se formaba un partido socialista con rasgos “reformistas”, la mayoría de la clase obrera no percibía otra forma de hacer valer sus demandas que accediendo al poder por la fuerza. Pensaba que esa irrupción le permitiría destruir la maquinaria del Estado, que en todos los casos significaba opresión.

El sistema marginaba a los obreros, ya que su participación política era percibida como una amenaza por los sectores capitalistas. Al no existir sufragio universal ni un ordenamiento legal que protegiera a los trabajadores inmigrantes y nativos, no había derechos sociales mínimos. Por lo tanto, los sindicatos anarquistas y aun socialistas fueron a veces arrastrados a enfrentamientos globales a través de huelgas “revolucionarias” y se debatieron en la semiclandestinidad.

La primera sociedad obrera se había constituido en 1857, cuando se fundó la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que era estrictamente una asociación de socorros mutuos, como casi todas las primeras entidades obreras. Recién en 1878 se produjo la primera huelga organizada por la Unión Tipográfica, dirigida por un obrero francés. Esa huelga triunfó y los tipógrafos obtuvieron mejoras de salarios y horarios de trabajo. Con la crisis de 1890 las condiciones de la vida obrera se hicieron más precarias, lo que fortificó la reciente organización de los primeros grupos anarquistas impulsada por el eminente activista italiano Enrique Malatesta y a los sectores socialistas, entre los que destacaban los alemanes exiliados que fundaron el Club Vorwarts. Se produjeron

entonces las primeras huelgas de albañiles, panaderos, cigarreros, maquinistas y fogoneros ferroviarios. Más tarde estos últimos fundaron “La Fraternidad”, sindicato aún existente. En 1891 y 1894 hubo intentos efímeros de crear centrales obreras.

El anarquismo adquirió un fuerte arraigo durante esos años, llegando a convertirse en la corriente ideológica de mayor aceptación en las organizaciones sindicales. Como sucedió en Europa, su auge se correspondía con un alza de las luchas sindicales enfrentadas a un sistema injusto que se visualizaba incapaz de reformarse por la vía de la negociación política. Su base social se encontraba en talleres artesanales y en pequeñas industrias donde abundaban obreros con oficios más o menos calificados, como en el caso de los panaderos, los zapateros, los plomeros, y otros. La acción anarquista condujo a la organización de la Federación Obrera Argentina en 1901, la central obrera permanente más importante de la época. Pero, su postura extrema, produjo la división de ese movimiento obrero y de sus sindicatos y dio pretexto al Estado para reprimir las tentativas de los trabajadores de organizarse y de conquistar mejoras sociales.

Tras la profunda agitación de los años 1909 al 1912, el anarquismo dio una batalla frontal contra el sistema capitalista durante el mes de enero de 1919, durante la huelga revolucionaria que provocó la “Semana Trágica” de Buenos Aires. Fue la consecuencia de la convulsión mundial que había engendrado la Guerra Mundial de 1914-1918. Algo semejante ocurrió dos años después en la provincia de Santa Cruz, a fines de 1921, con una matanza de obreros rurales huelguistas, igualmente despiadada y ejecutada por el Ejército, por órdenes del Presidente Yrigoyen. Debido a estas sangrientas frustraciones, comenzó a decaer definitivamente la vitalidad del anarquismo “revolucionario”.

Entretanto se desarrollaba el socialismo a partir de la fundación del Partido Socialista en 1894-1895. Desde sus comienzos, esta corriente ideológica se plegó a una postura legalista, influenciada por la prédica de Eduardo Bernstein, dirigente del Partido Socialista alemán, precursor de la socialdemocracia.

Este autor sostenía que era necesario replantear las luchas obreras ante la perspectiva de una larga supervivencia de la sociedad capitalista. Por lo tanto, los partidos y sindicatos obreros deberían lanzarse a la búsqueda de reformas que mejorasen la condición de los trabajadores y que, gradualmente, transformaran el sistema capitalista. Juan B. Justo, fundador del socialismo argentino, adoptó esta concepción del marxismo y pasó a representar una alternativa gradualista, opuesta al maximalismo anarquista. Desde esa perspectiva planteó un conjunto de temas sociales a través de proyectos legislativos a partir de 1904, logrando cierta audiencia en el seno de las ascendentes clases medias.

Los socialistas, aunque siendo minoritarios en el movimiento obrero, se retiraban del Congreso de la FOA de 1902 y juntamente con un grupo de sindicalistas “puros”, también disidentes del anarquismo, fundaban la Unión General de Trabajadores en 1903. Los programas de la FOA y de la UGT no diferían en sus objetivos inmediatos. Se trataba, en ambos casos, de lograr la jornada de ocho horas diarias, la prohibición del empleo de menores de 14 años, un mínimo de salario con base oro, igual salario a igual producción tanto para el varón como la mujer, abolición del trabajo a destajo, descanso dominical y limitación del trabajo nocturno. Pero las estrategias y las tácticas para lograr esos fines eran diversas y enfrentaban a los sindicalistas anarquistas con los socialistas. Después de 1907 se entró en un período de organización del sindicalismo y de creciente agitación obrera. La FOA, transformada en Federación Obrera Regional Argentina (FORA) durante el Congreso de 1904, encarnaba la posición “pura y dura” del anarquismo inspirado en Bakunin y Kropotkin. La UGT, transformada durante 1909 en Confederación Obrera Regional Argentina (CORA) pasó a ser controlada por los sindicalistas “puros”, con participación minoritaria socialista. La corriente “sindicalista” representaba el término medio entre el anarquismo y el socialismo, era menos elitista y más pragmática que el socialismo y menos extremista aunque tan “gremialista” como el anarquismo. Proveniente de una relectura

moderada de esta última posición ideológica, el sindicalismo “puro” —cuyo rol sería de creciente importancia en el movimiento obrero nacional— adoptó una actitud semi-legalista, ubicua, poco atada a un “dogma ideológico” y desconfiada de los partidos políticos.

Una preocupación constante fue llegar a la unidad organizativa del movimiento obrero. Ella se logró, fugazmente, en 1914, pero ya en 1915 la central sindical FORA volvió a fracturarse en las tendencias antes señaladas: la FORA del V Congreso, de ideología anarquista, que había pasado a ser minoritaria en el Congreso de ese año (1915) y la FORA del IX Congreso, controlada por sindicalistas “puros” y socialistas. Esta última creció considerablemente entre 1915 y 1919, pasando de 20 mil a 200 mil afiliados individuales y de 51 a 530 sindicatos adheridos. La Federación Obrera Marítima, con 22 mil afiliados en 1919, constituía la entidad sindical más importante de la FORA del IX Congreso.

La movilización obrera del período 1907-1919, que tuvo sus momentos de mayor tensión entre 1909 y 1912, llevó a serios enfrentamientos callejeros, a huelgas masivas y a una severa represión estatal. Una referencia destacada de esos conflictos fue la huelga de los inquilinos de 1906, contra la inicua explotación que practicaban los propietarios de conventillos. En 1912 se dictó la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio, y abrió la posibilidad del acceso al gobierno de la Unión Cívica Radical, partido mayoritario, lo que sucedió en 1916. Entretanto, comenzaba la Primera Guerra Mundial, que puso a prueba la estabilidad del sistema capitalista mundial. Resultados del conflicto bélico fueron la revolución obrera rusa, dirigida por comunistas leninistas, y situaciones prerrevolucionarias en Alemania, Hungría y, en menor medida, una decena de otros países europeos.

El gobierno democrático de Yrigoyen, votado por muchos obreros, despertó expectativas de reformas económico-sociales, difíciles de llevar a cabo en un período de crisis económica causada por la misma guerra. Ello condujo a importantes huelgas, como las protagonizadas por la Federación Obrera Marítima en 1916, la de los gremios ferroviarios (Federación Obrera

Ferrocarriles, la Fraternidad) en 1917 con la solidaridad de la FOM y, en fin, la huelga de los metalúrgicos en los talleres Vasena de fines de 1918 que concluiría en los sangrientos episodios de enero de 1919.

Contradictoriamente, el radicalismo mejoró relativamente las condiciones sociales dictando las primeras leyes de protección del trabajo y estableció relaciones con gremios moderados, sobre todo de la corriente sindicalista “pura”. Por otra parte, la guerra aceleró el proceso de industrialización, ampliando el mercado de trabajo. Por ello crecieron los sindicatos, organizativa y numéricamente, y los anarquistas dejaron de ser mayoritarios. La represión que se desató contra estos últimos sería el epílogo de un proceso que estaba en marcha y que conducía irremediamente al fin del predominio del sindicalismo “revolucionario”.

■ Expansión industrial y predominio del sindicalismo reformista (1920-1945)

Si bien la Primera Guerra implicó una expansión industrial muy importante, hacia 1930 la capacidad industrial del país se correspondía con un mercado de trabajo en el que predominaban los obreros calificados y semi-artesanos. La crisis del ‘29 puso fin al desarrollo argentino basado en la exportación agropecuaria, el llamado desarrollo “hacia afuera”. La misma oligarquía terrateniente-exportadora decidió iniciar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. La masa obrera se acrecentó y la demanda de mano de obra no especializada atrajo hacia los centros urbanos, sobre todo Buenos Aires y Rosario, una considerable corriente migratoria que se desplazó desde las provincias marginadas y subdesarrolladas.

En el movimiento obrero se caracterizó el predominio numérico de los sindicatos socialistas y del sindicalismo independiente o “puro”. Su principal arma fue el uso de las vías parlamentarias y legales para obtener una legislación favorable a los intereses obreros, confiando en modificar progresivamente la situación de injusticia y adquiriendo el poder

político por la vía de las urnas. Sin embargo, el profundo cambio económico y político que se operó en 1930 no fue comprendido en toda su profundidad por la dirigencia sindical mayoritaria. Ese sindicalismo no defendió el régimen democrático ni supo captar la gran masa de migrantes internos que, durante la década de los '30, engrosaría las filas del movimiento obrero, conformándose una masa políticamente vacante.

A su vez, los sindicalistas “puros” y los socialistas generaron formas de integración con el sistema de poder político, sobre todo durante los gobiernos radicales pero también después de 1930, durante los gobiernos militares o conservadores, reticentes a las demandas populares. A medida que se expandía la economía urbano-industrial, los grandes sindicatos, como los marítimos y los ferroviarios, pasaron a tener mayor importancia en el seno del movimiento obrero organizado, desplazando a los pequeños sindicatos de oficios que habían sido la base principal del poderío anarquista. En la década de 1930, la Unión Ferroviaria, con cerca de 100 mil afiliados, se convirtió en el gremio líder del mundo sindical nacional.

Sin embargo, es conveniente realizar algunas precisiones. En primer lugar, la afirmación del movimiento gremial moderado, operada entre 1910 y 1920, continuó hasta 1925 pero, después de esta fecha, el sindicalismo decayó. La prosperidad económica influyó para que disminuyesen los conflictos sociales y las divisiones sindicales internas ayudaron a debilitar las fuerzas de la clase obrera. En 1922 se había llevado a cabo un Congreso de Unificación Sindical, del cual sólo estuvo ausente la FORA anarquista. De ese Congreso nació la Unión Sindical Argentina, con predominio de los sindicalistas “puros” y participación socialista y comunista. Esta nueva tendencia había surgido en 1921 con la escisión del ala izquierdista del Partido Socialista y como reflejo de la ruptura que, a nivel mundial, se producía en el movimiento obrero entre los social-demócratas y los seguidores de Lenin, el líder de la reciente revolución rusa. Sin embargo, la unidad sindical duró poco tiempo. En 1924,

el grupo socialista se separó de la USA y los comunistas fueron expulsados de la misma. La USA quedó reducida a unos 15 mil miembros, mientras los socialistas formaban, en alianza con los sindicalistas “puros”, la Confederación Obrera Argentina en 1926. Esa central agrupaba a la Unión Ferroviaria, a la Unión Obrera Metalúrgica y a la Federación de Empleados de Comercio, llegando a sumar 130 mil afiliados hacia 1930. Incluso los comunistas formaron una pequeña central vanguardista, el Comité de Unidad Sindical, que atacaba duramente a los socialistas, a los sindicalistas “puros” y a los propios anarquistas.

La segunda precisión es que, el proyecto de creación de la Confederación General del Trabajo, impulsado sobre todo por sindicalistas “puros” y socialistas, trató de detener la división del movimiento obrero y coincidió con el crucial año 1930. Las gestiones de unidad habían comenzado en julio de 1928, en un momento que el sindicalismo había conocido su mayor fragmentación. Esta segmentación perjudicaba los intereses de la clase trabajadora, contribuía a disminuir el aún débil poder de negociación de los sindicatos y se manifestaba en la reducción del número de afiliados y hasta en la pérdida de representación del socialismo parlamentario, que se confinó a un solo legislador en 1930. Si bien el anarquismo tendía a desaparecer como fuerza sindical significativa, la aparición del comunismo agravaba las dificultades que impedían la marcha hacia una posible unidad, sobre todo por las posiciones maximalistas de la Tercera Internacional a la cual estaba adherido y por la profunda rivalidad que, en ese momento, separaba a nivel mundial a los leninistas respecto de la Segunda Internacional Socialista, a la cual adhería la Confederación Obrera Argentina (COA). Por lo tanto, las negociaciones para crear la CGT fueron lentas, la FORA no aceptaba otra unidad que la realizada alrededor de su programa, sectores de la COA desconfiaban de las tendencias anarquistas existentes entre los gráficos de la USA y los comunistas tampoco admitían la unidad con “fuerzas reformistas”¹.

1 Los comunistas, el ala más radical –aunque minoritaria– del movimiento obrero de la época, fueron duramente reprimidos entre 1930 y 1935, como consecuencia del golpe restaurador y pro-oligárquico de 1930.

Los primeros síntomas de la crisis mundial y la nueva situación planteada por el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Yrigoyen, precipitaron el dificultoso proceso de la unidad sindical. El 27 de septiembre de 1930 se realizó la primera reunión del Comité Nacional Sindical que creó una nueva central con la denominación de Confederación General del Trabajo (CGT), siendo elegido como primer secretario general el delegado de la Unión Ferroviaria, Luis Cerutti. Los caracteres principales de la flamante CGT eran, por un lado, el predominio de la tendencia sindicalista apolítica sobre los socialistas, proclives a una mayor participación política o partidista. Por otro, la influencia decisiva de la Unión Ferroviaria, por su peso numérico. Finalmente, la poca representación del sector industrial en el Comité Nacional Sindical, que luego se llamará Comité Confederal.

En diciembre de 1935, mientras se preparaba el Congreso Constituyente de la CGT, los socialistas de la Unión Ferroviaria, cuya hegemonía no fue reconocida por la Junta Directiva de la CGT, coparon el edificio de la calle Independencia generando el primer “golpe” obrero de nuestra historia social. La mayoría del movimiento obrero se agrupó alrededor de la CGT de la calle Independencia, mientras los sindicalistas “puros” organizaban la CGT de la calle Catamarca que, en mayo de 1937, tomaba el nombre de Unión Sindical Argentina (USA). En la CGT, con más de 200 mil afiliados, los socialistas recibían el apoyo de los comunistas, quienes habían emprendido la nueva táctica “frentista” para luchar contra el fascismo. En los años posteriores, la CGT afianzó su organización a partir del largamente preparado Congreso Constituyente de abril de 1936 y de la elección como secretario general del gremio ferroviario, José Domenech en 1937. Se realizaron dos congresos ordinarios entre 1939 y 1942, lo cual evidenciaba la relativa regularidad institucional de la Confederación, que acrecentó el número y la capacitación de sus cuadros dirigentes.

Puede afirmarse que, tanto en la CGT como en la USA, había crecido la tendencia hacia una mayor participación política y partidaria del sindicalismo y existía una mayor conciencia nacional frente a los efectos sociales

de la dominación económica británica y norteamericana. Como consecuencia de esta politización, en marzo de 1943, la CGT se dividió entre la CGT N° 1, controlada por sindicalistas “puros” y socialistas próximos a la concepción no partidista del sindicalismo, y la CGT N° 2, controlada por los socialistas y los comunistas.

■ Programa de desarrollo por sustitución de importaciones y el sindicalismo integrado al Estado (1945-1955)

La Segunda Guerra Mundial aceleró con fuerza el proceso de industrialización y la burguesía industrial nacional adquirió mayor peso. La “Revolución Militar” del 4 de junio puso fin a la contradicción de que, un país en plena expansión de la industria capitalista, estuviese socialmente gobernado por representantes de una burguesía terrateniente y agro-exportadora. Este típico “cuartelazo” desató las fuerzas sociales ascendentes y originó sin proponérselo un movimiento nacionalista popular, típico de los países latinoamericanos. Por una parte, muchos de los nuevos asalariados migrantes no se integraban al sindicalismo existente, en gran parte debido a que sus organizaciones, sus ideologías y la mentalidad de sus dirigentes no se adecuaron con la rapidez debida al profundo cambio de la década de los años treinta.

Por otro lado, la burguesía industrial estaba preocupada en tener un poder sociopolítico que le permitiese afirmar su proyecto industrializador en curso. Por cierto, la burguesía a la que nos referimos estaba compuesta por empresarios pequeños, medianos y algunos de mayor dimensión, cuyo crecimiento se había producido al abrigo de las formas proteccionistas que impusieron la crisis de 1930 y luego la Segunda Guerra. Su subsistencia dependía del mantenimiento de la protección de esa producción industrial, impulsada por el Estado, y a la cual se oponían fracciones burguesas ligadas al capital extranjero y la vieja “oligarquía” agro-exportadora, nostálgica de un país integrado sin cortapisas al mercado mundial capitalista y partidaria del liberalismo económico libre-cambista del siglo XIX.

A partir de la gestión del Coronel Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión en octubre de 1943, se inició el período que cambiaría las formas organizativas y la ideología del movimiento obrero organizado en poco más de dos años, gracias al apoyo popular que recibieron las muchas leyes sociales dictadas en ese período².

La politización de los sindicalistas se ampliaba desde el inicio de la década de 1930 y, por ello, el diálogo con militares reformistas se hizo posible a medida que esas leyes sociales dictadas por el Estado satisfacían viejas demandas obreras. Cuando estas conquistas fueron amenazadas por la oposición al Coronel Perón, la mayoría de los viejos sindicalistas, apoyados por numerosos sectores obreros organizados o, hasta entonces no organizados, reclamaron y obtuvieron la libertad de Perón el 17 de octubre de 1945 y cambiaron el curso de la historia argentina. Al mismo tiempo, ante la inminencia de las elecciones, los sindicalistas formaron el Partido Laborista para apoyar la candidatura del jefe militar transformado en fundador de una nueva organización política.

El acto electoral de febrero de 1946 marcó el triunfo de una opción política autónoma de la mayoría de los trabajadores organizados en la CGT y aliados a la propuesta de la burguesía industrial nacional. En la “década peronista” se asistió al particular fenómeno de la integración del movimiento sindical dominante a un sistema de poder que seguía siendo capitalista. Es que la ejecución de la política justicialista de desarrollo nacional implicaba la incorporación activa del sindicalismo y la ley de asociaciones profesionales de 1945 fue el instrumento para realizar esa integración. Dicha ley reconoció a los sindicatos como asociaciones de derecho público y estableció el control del Estado sobre los ingresos y gastos de la organización sindical, además de la capacidad, otorgada al Ministerio de Trabajo, de adjudicar y retirar personerías gremiales. Si bien la afiliación a un gremio no se hizo obligatoria, la personería gremial se otorgó al sindicato mayoritario por rama de actividad, afirmando desde el Estado

la voluntad de estructurar un movimiento sindical unido e impidiendo la atomización de los intereses obreros. La medida más avanzada de esta legislación fue reconocer al sindicalismo el derecho de participar en política, con lo cual el Estado asumía, por primera vez, el contenido político de las luchas sindicales. De la adhesión masiva de los trabajadores al justicialismo surgió una organización sindical cuya dimensión numérica quedó quintuplicada, pasando de 600.000 afiliados a 3 millones. El Partido Laborista, contra la voluntad de sus principales dirigentes, fue disuelto e integrado al partido que se llamará Justicialista o Peronista por decisión de Perón.

De esta realidad compleja surgieron dos consecuencias contradictorias para la CGT. Por una parte, el sindicalismo tomó conciencia de su poder, su dignidad y su lugar en la historia nacional y, por primera vez, fue partícipe del sistema de poder estatal. Por otra parte, su autonomía política se limitó, aunque nunca desapareció totalmente, lo que favoreció cierta burocratización de sus dirigentes.

Quedan para “el haber” de esta época fundamental en la historia argentina una transformación social profunda e incruenta, que el General Perón no quiso imponer por la violencia, convencido de que la guerra civil destruía la nación. También quedaban, el surgimiento de un sólido sindicalismo de masas, la aparición de complejos aparatos de dirección gremial que posibilitarían la rápida movilización obrera, la unificación del movimiento sindical, la promoción de nuevos dirigentes con concepciones pragmáticas y realistas de la vida social y política y la experiencia de una participación en las decisiones estatales, sobre las cuales la CGT influyó entre 1946 y 1955.

Quedan para “el debe” del mismo período, el desarrollo de una concepción estatista de los sindicatos, por la cual las conquistas sociales del movimiento obrero pasaron a depender de una política privilegiada con el Estado. Las ideologías tradicionales del movimiento obrero fueron sustituidas por la cultura peronista que sostenía un programa de acción pragmático

2 Ellas constituyeron una notable ampliación del Derecho Laboral y el gobierno se encargó de hacerlas cumplir.

dirigido hacia el conjunto de una nación hasta entonces económicamente dependiente, a la cual se le proponía un método de integración política para devenir independiente e influyente en el escenario geopolítico. La difusión y aplicación de ese ideario fue gestando un movimiento obrero que no planteó un proyecto global de sociedad alternativa al capitalismo, tal como los que surgieron de la perspectiva utópica sostenida por movimientos similares en otros países. Derrocado el peronismo, los trabajadores concibieron la “utopía” movilizadora del retorno del líder, una perspectiva limitada en comparación con aquellos proyectos alternativos. Por otra parte el ascenso tumultuoso del peronismo en la vida sindical fue acompañado por confrontaciones con otras corrientes, particularmente las minorías comunista y socialista que denunciaron el uso de métodos intimidatorios y, poco democráticos empleados por sus nuevos rivales para desplazarlas. El proyecto estatal de unificar el sindicalismo y eliminar la oposición a la conducción mayoritaria de la CGT contribuyó a la perduración de rasgos de dependencia estatal en el sindicalismo de orientación peronista, lo que si al principio pudo ser funcional para el proyecto unificador, con el correr del tiempo se expuso a la crítica de las corrientes gremiales competidoras.

Precisamente el poder económico y político alcanzado por las conducciones gremiales a favor de su vinculación privilegiada con el Estado, los expuso a la crítica de sus opositores que enfatizaron sus rasgos burocráticos. Los dirigentes que actuaron en el primer plano sindical entre 1946 y 1955 pagaron con su proscripción errores y culpas reales y supuestas o imaginadas. Las nuevas generaciones de sindicalistas peronistas confirmaron luego que el pragmatismo conduce a menudo a la política de compromisos pero no siempre es eficaz para superar la confusión política e ideológica. En todo caso, la transformación de un sindicalismo de estilo ideológico europeo en la CGT peronista que, contra todos los avatares históricos, perdura hasta hoy, se debió a una compleja red de factores, analizados por historiadores y sociólogos. Ello sólo demuestra que la Argentina no es un país desarrollado y que sus sectores subalternos enfrentan a una

burguesía dominante que hasta ahora no se ha mostrado capaz de sostener el desarrollo del país a largo plazo.

Entre los factores que explican la aparición y permanencia de la CGT peronista se encuentra la fuerte presencia histórica de sindicalistas “puros”, inclinados a un pragmatismo político que los acercó naturalmente a la propuesta del Secretario de Trabajo y Previsión de un gobierno militar dictatorial. Además, el liderazgo carismático del mismo Perón sobre las masas obreras, que obligó a muchos “viejos” dirigentes sindicales a plegarse al nuevo movimiento político, so pena de quedar marginados de la conducción real de sus gremios. Otro factor fue el fracaso del proyecto de formar un Partido Laborista, cuya concepción se oponía al liderazgo personal de Perón y su concepción de “Partido-Movimiento Nacional”, que fue rápidamente disuelto por el flamante presidente constitucional de 1946. También explica la perduración de la CGT peronista, la formación en aquel momento de nuevas y grandes concentraciones industriales que determinaron el predominio de gremios que, como los obreros de la carne, los metalúrgicos y los textiles, estaban conformados por bases peronistas. Estos gremios pasaron a liderar la central obrera por su peso numérico y por su importancia cualitativa en este período de rápido desarrollo industrial del país. Otro factor muy significativo ha sido la ampliación de una red de obras sociales, con las cuales los sindicatos asistieron a sus afiliados en materia de salud y recreación, generando un indudable flujo de beneficios que se transformarían en consiguiente adhesión y apoyo por parte de los afiliados beneficiarios.

La alianza social burguesía nacional-trabajadores, sustentada en la popularidad de Perón y en la neutralidad del Ejército, comenzó a fracturarse hacia 1952, cuando se produjo la primera crisis económica grave del modelo de sustitución de importaciones, gestada en la debilidad del sector externo. Las exportaciones esencialmente agropecuarias del país no alcanzaban para pagar las importaciones de energía y de insumos industriales, indispensables para mantener en funcionamiento el aparato industrial del que se había dotado

la Argentina. Estas crisis se repetirían cíclicamente cada cuatro o cinco años, entre 1952 y 1975, y su primer efecto fue multiplicar las tensiones en el interior del bloque peronista en el poder. Pese a que el plan de estabilización concebido por el ministro Antonio Cafiero dio resultados positivos, la burguesía nacional, las clases medias, la Iglesia, y al fin, las Fuerzas Armadas rompieron lanzas contra el poder personal de Perón, preocupadas por el supuesto poder desmedido de la clase obrera organizada y dispuestas a disciplinar las demandas de los sectores sociales subalternos.

En un clima de odio social extremo, ello condujo a la conspiración de todos los partidos políticos opositores y de la Iglesia Católica contra el gobierno constitucional; conspiración que desembocó en el despiadado bombardeo del 16 de junio de 1955 y en el golpe de septiembre de ese año, que puso fin a la participación del sindicalismo en el esquema de poder.

■ **Crisis cíclicas: surgen prácticas sindicales peronistas participacionistas, negociadoras, confrontacionistas y combativas (1955-1976)**

Las crisis económicas y políticas cíclicas que se iniciaron en los años cincuenta y se repitieron hasta 1976, tuvieron una naturaleza estructural que fue someramente descripta en el párrafo anterior y aportaron inestabilidad general que hizo imposible encontrar una fórmula democrática para neutralizar el apoyo mayoritario relativo que las clases subalternas seguían dispensando al proscrito presidente depuesto Juan Perón y a su movimiento. Las crisis de 1957/58, 1962/63, 1966, 1970 y 1975 dieron lugar a planes de estabilización que deterioraban, al menos temporariamente, el salario real y el nivel de empleo, generando tensiones sociales que no eran canalizadas por un sistema político bloqueado por la exclusión del peronismo y, después de 1973, por la generalización de la violencia y la debilidad del gobierno que sucedió al propio Perón, después de su muerte acaecida en julio de 1974.

El sindicalismo peronista jugó un rol significativo en estos veinte años de historia nacional, marcados por una crisis de hegemonía social que se expresó en la debilidad de los gobiernos civiles y en los frecuentes golpes militares que se sucedían a sí mismos sin lograr resolver ningún problema esencial. ¡Doce presidentes ocuparon la Casa Rosada, con un promedio de permanencia de un año y siete meses!

El golpe militar de noviembre de 1955 intervino la CGT, proscibió a los dirigentes sindicales peronistas por millares y pretendió cambiar la estructura sindical. Sin embargo, la “resistencia” liderada por una nueva camada de jóvenes sindicalistas afines al peronismo, neutralizó los planes políticos-sindicales de la llamada “Revolución Libertadora”. Se inició una etapa en la cual el sindicalismo peronista representó una oposición sistemática a todas las tentativas para encauzar el país por la vía de un desarrollo basado en la participación del capital extranjero. Asimismo, la CGT hostigó a los siete gobiernos que, entre 1955 y 1973, se sucedieron por la vía de elecciones con proscripción del justicialismo, o por la de golpes militares carentes de apoyo popular.

Desde el punto de vista sindical, la confrontación con la dictadura de Aramburu condujo a conservar la mayoría de organizaciones sindicales en el Congreso Normalizador de 1957. En tanto que la confrontación-negociación con el Presidente Arturo Frondizi (1958-1961) permitió que la normalización efectiva de la CGT concluyese en marzo de 1961 con la recuperación de su control por las “62 Organizaciones peronistas”, lideradas por la Unión Obrera Metalúrgica y su “hombre fuerte”, Augusto T. Vandor. Para llevar a cabo su estrategia, la CGT usó las más diversas armas: la acción directa, la huelga general, la toma de fábricas y, al mismo tiempo, una actitud permanente de negociación con el Estado, con el fin de lograr que este cumpliera el rol de tutelar los intereses de los trabajadores. Sin embargo, la complejidad de este accionar fue dividiendo a los dirigentes sindicales peronistas en cuatro tendencias: los combativos anti-capitalistas, los confrontacionistas que privilegiaban la lucha, los participacionistas que usaban la

negociación, en particular con el Estado y un sector mayoritario, adscrito al estilo de conducción de Vandor, que utilizaba alternativamente la negociación y la lucha. Esa división se manifestó con total claridad después del golpe militar de 1966.

Entre 1963 y 1966, durante el gobierno de Illia, el sindicalismo llevó a cabo una activa movilización a través de los “Planes de Lucha”, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y de terminar con la proscripción política del peronismo. En el aspecto económico-social se obtuvieron éxitos significativos y se estableció cierto grado de concertación a través de la mediación del Estado. Pero, fracasado el “Operativo Retorno” de Perón, el movimiento sindical creyó que el gobierno radical no podía, sea por motivos externos o internos al mismo, restablecer el pleno imperio de un juego electoral sin proscripciones. La actitud a seguir frente a la hipótesis de un “peronismo sin Perón” dividió entonces a la CGT en dos tendencias. La CGT “Leales” liderada por Augusto Vandor, que concibió la idea de un Partido Sindical sin Perón, por un lado, y la CGT “de pie junto a Perón”, por el otro, liderada por José Alonso, que mantuvo el apoyo incondicional al líder exiliado en Madrid. Luego, el sector liderado por Vandor se inclinó a otorgar un apoyo condicionado al golpe militar que llevaron a cabo los líderes del Ejército “Azul” el 28 de junio de 1966³.

No hay que olvidar que los golpistas se presentaban como el ala nacionalista del Ejército que había desplazado al sector anti-peronista “duro”. La expectativa generada por la llamada “Revolución Argentina”, impulsó al conjunto del sindicalismo a seguir los pasos del vandorismo durante el resto del año 1966, produciéndose una relativa pausa en las luchas sindicales. Esas expectativas se fueron desvaneciendo ante la incoherencia del primer equipo ministerial del general Onganía y se trocaron en total oposición cuando, en marzo de 1967, el ministro de economía Krieger

Vasena definió el plan de desarrollo del quinquenio siguiente con caracteres liberales. Las dos alas de la CGT se unieron en un plan de lucha común que fracasó por la dura represión del régimen. De esta prueba de fuerza la CGT quedó debilitada, con varios gremios intervinidos y con la destrucción total pendiente como amenaza. La supresión de las paritarias, el deterioro del salario real y la desmovilización del movimiento obrero fueron el corolario de esa batalla perdida por el sindicalismo.

A partir de la derrota del plan de lucha de 1967, comienzan a gestarse las tácticas y los esquemas de vinculación con el Estado anticipados anteriormente. Por un lado, un sector de sindicalistas se inclinó por intentar dialogar con el gobierno autoritario, negociando la supervivencia de la CGT y su posible integración al nuevo sistema político que Onganía imaginaba crear. Esa tendencia se denominó “Nueva Corriente de Opinión” o “participacionista”. Por otra parte, se desarrolló un ala confrontacionista con peso significativo en algunos sindicatos nacionales y en las zonas más industrializadas del interior del país. Estas tendencias se expresaron en oportunidad del Congreso Normalizador de marzo de 1968 y el conflicto entre ellas condujo a la división del movimiento sindical. Dos meses después la escisión de la CGT quedaba formalizada: por un lado encontramos la CGT “de los Argentinos” (confrontacionistas y una minoría combativa) y, por otra parte, la CGT de Azopardo (vandoristas y participacionistas).

El ala confrontacionista-combativa contribuyó a crear un clima de movilización popular contra el régimen, sobre todo en el interior del país, lo cual condujo a los procesos de agitación social de Corrientes, Rosario, Tucumán y Córdoba de mayo de 1969. El paro general del 30 de mayo, declarado por las dos CGT, fue el producto de la exitosa acción confrontacionista-combativa, que asestó un duro golpe al gobierno de Onganía. Como resultado de estos hechos y retaceado el apoyo militar al presidente,

3 El intento de Vandor de generar un “peronismo sin Perón” que fuera admitido en el juego electoral, fue resistido dentro del sindicalismo por la tendencia “de pie junto a Perón” y en el conjunto del movimiento peronista, por el propio Perón que envió a Isabel Perón, quien llegó al país en 1965 para representarlo. Las elecciones provinciales de Mendoza cuantificaron el predominio de los antivandoristas y del propio Perón.

este relevó al ministro de Economía al tiempo que prometía convocar a las Comisiones Paritarias. La CGT de los Argentinos se diluyó en la clandestinidad después de la detención de su secretario general Raimundo Ongaro. Entre tanto, la CGT de Azopardo fue puesta bajo tutela del Estado como consecuencia de la muerte de Vandor en junio de 1969. Pese a la intervención oficial y haciéndose eco del creciente descontento popular, el sector vandorista convocó un paro general para el primero de octubre de ese año. Sin embargo, el gobierno consiguió que el participacionismo y una parte de los vandoristas levantasen el paro a cambio de nuevas concesiones: la significativa ley de Obras Sociales que le otorgaba una sólida base económica a los sindicatos y la vaga promesa de rectificar la política económica. De este modo, la CGT, cuyo control compartían el vandorismo y el participacionismo, iniciaba el camino hacia su normalización bajo la intervención de Valentín Suárez.

Con la destitución de Onganía en junio de 1970, las Fuerzas Armadas comenzaron a buscar una salida política democrática a la explosiva situación generada por la primera etapa de la Revolución Argentina. Entretanto, se reunió el Congreso Normalizador de la CGT, el cual eligió un Consejo Directivo controlado por los vandoristas, contando con la presencia de los participacionistas. El secretario general electo fue José Rucci, apoyado por Lorenzo Miguel, Secretario General de la UOM. A partir de ese momento, julio de 1970, la CGT acomodó su accionar al del movimiento peronista y se recompusieron las "62 Organizaciones" como brazo gremial del justicialismo. No se pudo evitar la notoria oposición a esta estrategia movimientista, por una parte, del participacionismo que mantenía sus lazos con el gobierno militar, adosándose a su esquema político y por la otra, del sector denominado combativo, que exigía reivindicaciones económicas inmediatas y profundas. Durante el proceso electoral las divergencias mencionadas se atenuaron porque se impuso el proyecto político vandorista, apoyado por Perón, y los participacionistas se subsumieron en la línea de la conducción de la CGT. Fuera de ella quedarían menos de diez federaciones

controladas por diversos grupos confrontacionistas y combativos, peronistas o adherentes a posiciones marxistas.

Después de 1973, la dirigencia de la CGT se vio enfrentada a tres grandes desafíos. Por un lado, tuvo una nueva participación en el sistema de poder durante los gobiernos peronistas del período 1973-1976, frente a la que debió afirmar una cierta autonomía política, no exenta de conflictos. En un primer momento se alineó tras la conducción de Perón, manteniendo el pacto social y enfrentando atentados desatinados contra sus dirigentes. Luego, después de la muerte del General Perón y ante el giro económico impuesto por la influencia de José López Rega, durante la presidencia de Isabel Perón, la CGT jugó un rol determinante en la canalización de la agitación social que concluyó con el alejamiento en julio de 1975 del siniestro Ministro de Bienestar Social y organizador del grupo paramilitar Tres A, y en el inicio de una escalada inflacionaria que destruyó el pacto social impuesto por el gobierno justicialista.

El segundo desafío que afrontó la CGT se relacionó con la toma de responsabilidades gubernamentales importantes entre agosto de 1975 y enero de 1976, pues Isabel Perón designó en el Ministerio de Economía y en el de Trabajo, a hombres próximos a la conducción sindical (Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf). En esa coyuntura se advirtió claramente la impotencia sindical para lograr estabilizar la crisis económica y para mantener el nivel de ingreso de la masa asalariada, ante la presión empresarial y la preparación de un nuevo golpe clerical-militar.

El tercer reto fue la creciente contestación de las bases radicalizadas, influidas por las posturas del peronismo combativo o por ideologías clasistas, marxistas, trotskistas y otras. Frente a esta corriente contestataria, la cúpula cegetista apeló a la manipulación antidemocrática o a la represión directa o indirecta de los militantes maximalistas y no violentos. Esas prácticas, llevadas a cabo en el Gran Rosario y en Córdoba, aumentaron el desprestigio de la conducción de la CGT. El golpe de 1976 justificó su accionar en la lucha contra la corrupción sindical y se dedicó a eliminar

físicamente la emergencia de dicha corriente clasista y combativa, aprovechando la confusión o indiferencia de la dirigencia sindical mayoritaria.

El período concluyó con un conflicto económico-social intenso. Confluían factores internos como la campaña de desprestigio contra el gobierno peronista, la parálisis de los partidos políticos y la acción de grupos armados y factores externos, como la crisis capitalista mundial, desatada por el aumento del precio del petróleo. Unos y otros se sumaron para generar un ambiente propicio al golpe de las Fuerzas Armadas que se produjo en marzo de 1976. El aislamiento del gobierno de la viuda de Perón había producido la anomia del sindicalismo, cada vez más fracturado, burocratizado y cuestionado desde adentro del movimiento obrero y desde el resto de la sociedad.

Tantos años de oposición al sistema socio-político dominante habían dejado huellas indelebles en la cúpula sindical; entre ellas destacamos las tendencias a la burocratización (con signos de corrupción) y a la división. Lo que es peor, esos años habían servido para incrementar las falencias de muchos dirigentes sindicales incapaces de concebir un proyecto político viable desde la misma organización sindical. Sin embargo, en un balance del período 1955-1976, no puede menospreciarse el hecho de que los dirigentes sindicales hayan podido mantener el nivel del ingreso obrero y el del empleo, pese a las políticas de ajuste periódicamente aplicadas y pese a que el partido representativo de sus intereses fue proscrito entre 1955 y 1973. Esto demuestra la capacidad de negociación y el relativo poder de veto económico-social que ejerció el sindicalismo frente a la amenaza permanente de políticas económicas liberales y antisociales predicadas por los sectores predominantes del capital.

94

■ Las prácticas sindicales frente al plan neo-liberal autoritario y el terrorismo de Estado (1976-1983)

Si bien el golpe de 1976 contaba con el apoyo del bloque social dominante, incluida la fracción burguesa nacional que había apoyado

el retorno del peronismo al gobierno y de las clases medias, la puesta en práctica del plan económico del “proceso” erosionó parcialmente esos apoyos. La clave de la política de Martínez de Hoz se desplegó gradualmente, de acuerdo al prometido Plan del 2 de abril de 1976. Fue entre 1977 (reforma financiera) y 1978 (rebajas arancelarias y pauta cambiaria) que se establecieron los mecanismos fundamentales que reorganizaron la economía nacional, generando una transferencia de poder al sector del capital financiero, que sería el principal beneficiario de las prácticas especulativas que se constituyeron en una decisiva actividad económica en el país y en el mundo. Así se intentó poner fin a cuarenta y seis años de regulación económica estatal, imponiendo la economía de mercado.

Sin embargo, hacia 1980, los industriales de toda dimensión, los comerciantes y los mismos productores agropecuarios medianos y pequeños estaban siendo perjudicados por el ensayo económico sostenido por la dictadura. Ante el fracaso de la lucha contra la inflación, todas estas fracciones sociales demandaron el cese del Ministro Martínez de Hoz y, pese al terrorismo de Estado prevaleciente, las Fuerzas Armadas cedieron ante dichas presiones. El relevo del dictador Videla por su cómplice Viola condujo a la designación de un Ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, expresión de esa convergencia de intereses. La carencia de un proyecto económico alternativo, capaz de provocar consenso en la sociedad, condujo a la parálisis económica durante la dictadura de Viola. Así se manifestaba con claridad la imposibilidad de gestar “una” política nacional debido a los enfrentamientos sectoriales, los cuales se prolongaron durante los años ochenta.

Sin embargo ciertas orientaciones impuestas entre 1976 y 1981 marcaron profundamente la economía nacional, generando hechos económicos de indudable trascendencia histórica. Esos hechos fueron, por un lado, la tendencia a la des-industrialización, expresada en la reducción del 30% de la actividad industrial en esos años. Junto a ello, el incremento de la actividad especulativa, mucho más rentable que cualquier inversión productiva y una considerable reducción del salario real.

Por lo demás, el golpe clerical-militar tuvo como uno de sus principales objetivos desarticular la estructura sindical que había organizado la movilización popular contra los diversos planes de ajuste entre 1955 y 1976 y en consecuencia atacó la organización obrera a través de tres líneas de acción. La principal fue la intervención de la CGT y de las principales federaciones y sindicatos afiliados a ella, junto a la suspensión de las actividades sindicales y del derecho de huelga, vinculados a la derogación de facto de la Ley de Contrato de Trabajo.

En paralelo, la dictadura utilizó en gran escala el mecanismo represivo. El terrorismo logró paralizar el accionar gremial por la acción directa de los “grupos de tareas” de la Fuerzas Armadas. Este accionar tuvo la finalidad, en gran medida lograda, de exterminar a los sectores sindicales radicalizados y de paralizar a los grupos moderados. De hecho cesaron de funcionar las comisiones internas en las empresas ante el secuestro y la desaparición de una significativa cantidad de delegados gremiales. El 50% de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura fueron trabajadores sindicalizados.

Por lo demás, los actores del golpe clerical-militar promovieron un sindicalismo “apolítico” y reducido a limitadas actividades reivindicativas, cuya expresión fue la Ley Sindical de noviembre de 1979.

En estas circunstancias, durante el transcurso de 1976, algunos dirigentes cegetistas que no estaban en prisión trataron infructuosamente de establecer un diálogo con el gobierno, en un clima de desmovilización obrera profunda, inducido por un inédito ambiente de miedo frente a la práctica del terrorismo de Estado. Fracasadas las gestiones de los “Diez” en el sentido de obtener algún reconocimiento oficial como dirección del movimiento obrero y ante la imposibilidad de mejorar la situación social, deteriorada por el plan económico de Martínez de Hoz, surgió en marzo de 1977 la Comisión de los “25” que asumiría el rol confrontacionista y estaba integrada por sindicalistas de inspiración peronista verticalista. Durante ese año, el movimiento obrero llevó a cabo una multiplicidad de acciones aisladas y algunos paros por rama de actividad, por lo

cual el número de trabajadores en conflicto se incrementó en un doscientos por ciento respecto a 1976. La flexibilización de la política salarial, tanto a nivel privado como público, y un mejoramiento relativo del salario real disminuyeron la tensión social.

En convergencia con la instrumentación política del Campeonato Mundial de Fútbol y la aparente estabilización de la estrategia económica dictatorial, el gobierno militar lograba acercamientos con dirigentes sindicales proclives al participacionismo. En consecuencia, en junio de 1978, surgió la Comisión de Gestión y Trabajo, conformada por las federaciones intervenidas, la cual se constituiría en la base principal de la Comisión Nacional de Trabajo (CNT) creada en octubre como el ala del movimiento sindical aceptada por la dictadura. Por su parte, el ala confrontacionista acentuaba su definición contra la marcha del “proceso”, fundando el Movimiento Sindical Peronista, en junio de 1978, y convocando al primer paro nacional de este período el 25 de abril de 1979, el cual fue severamente reprimido.

La división entre ambas alas fue transitoriamente superada con la conformación de la Conducción Unificada de los Trabajadores Argentinos (CUTA), creada en septiembre de 1979 para enfrentar la inminente promulgación de la represiva Ley Sindical 22.105 ya mencionada, con la que el autoritarismo imaginaba debilitar definitivamente al sindicalismo. Pese a ello, la unidad gremial duró poco tiempo: en abril de 1980 se registraba la escisión de la CUTA, pues participacionistas y confrontacionistas no lograron acordar sobre las tácticas a seguir para oponerse a dicha ley y a la política económica de Martínez de Hoz. En realidad estas divergencias correspondían a dos proyectos de vinculación con el Estado concebidos por el sindicalismo, los cuales se fueron acentuando en la medida de la perpetuación del poder militar y del agravamiento de la crisis económico-social.

Por una parte, el ala confrontacionista reconstituyó la CGT, en diciembre de 1980, en abierto desafío a las normas de la Ley Sindical bajo la influencia del dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel, sucesor de Vando

recientemente liberado por los militares. Saúl Ubaldini fue elegido para dirigirla, con el apoyo de Miguel. Durante 1981, este nucleamiento retomó contactos con los partidos políticos, convocó a un paro nacional en julio y organizó el primer acto de oposición masiva al régimen tiránico en noviembre. En 1982 la CGT propugnó el “Plan de Movilización Pacífica”, profundizando su estrategia, cuya primera manifestación de masas fue la concentración popular del 30 de marzo. Tres días después el gobierno militar inició la recuperación de las Malvinas, dando lugar a la guerra del Atlántico Sur, cuyo desenlace marcaría el comienzo de la transición a la democracia. La práctica de “los 25” y de la CGT constituyó el movimiento social más numeroso que enfrentó al terrorismo de Estado.

Por otra parte, el ala participacionista estableció un diálogo no exento de fricciones con las diversas conducciones políticas del “proceso” que se sucedieron desde agosto de 1980 hasta junio de 1982. La CNT no adhirió al paro de julio de 1981 ni al Plan de Movilización Pacífica, si bien estableció contactos con el accionar de la Multipartidaria y durante la guerra de las Malvinas decidió reconstruir la CGT en la sede de la calle Azopardo. Ese diálogo con el gobierno militar le acarreó enorme desprestigio y ningún beneficio.

Los sucesos posteriores a la catastrófica guerra de las Malvinas mostraron con mayor claridad que el esquema sindical inaugurado en 1945 daba muestras de debilidad, la que se agudizó con la derrota electoral del peronismo –dirigido por su ala sindical– en octubre de 1983. Las causas de esa crisis gremial eran diversas y complejas. En primer lugar, los profundos cambios económicos redujeron la mano de obra industrial y sindicalizada en cerca del 30%. Además, la división del movimiento obrero, insinuada en la anterior dictadura militar entre 1966 y 1973, se acentuó a nivel de la cúpula cegetista, sobre todo por las prácticas divergentes de los sindicalistas frente al Estado terrorista y represor de la organización obrera y achicó aún más las capacidades del sindicalismo. Por otro lado, la burocratización de la dirigencia sindical mayoritaria, fenómeno que se iniciaba después de 1960, llegó a

un grado extremo, porque las bases sindicales (delegados de fábrica, comisiones internas) fueron mucho más reprimidas que las cúpulas y casi dejaron de funcionar entre 1976 y 1982. Finalmente, la pérdida de valor del salario real y el incremento del desempleo entre 1976 y 1982, desacreditaron a los dirigentes sindicales en el área específica de su accionar, en la cual habían tenido éxito significativo hasta 1976.

Junto a esto, al prorrogarse los mandatos de los dirigentes gremiales y al no realizarse elecciones sindicales regulares desde 1966, la perennidad de muchos de esos dirigentes era de dudosa validez. De la misma forma, la corrupción de una categoría minoritaria de sindicalistas fue incrementándose como resultado de la falta de control por parte de los afiliados y de las crecientes “tentaciones” que multiplicaban el propio Estado y ciertas empresas. Desde 1976 se instaló la corrupción estructural en la Argentina y se demolió al Estado de Derecho existente hasta entonces, contaminando a todos los actores sociales.

Aún así, el peso político de los sindicalistas peronistas y el vacío de liderazgo en ese movimiento político condujeron a un avance del poder sindical al interior del justicialismo, que generó rechazo en las clases medias. Los candidatos peronistas en las elecciones de 1983 fueron definidos por la conducción de la CGT, dependiente de la autoridad sin carisma de Lorenzo Miguel. Sin el apoyo de una parte de esos sectores medios e independientes, ningún partido obrero occidental puede ganar las elecciones generales. El triunfo de la Unión Cívica Radical, dirigida por Raúl Alfonsín, confirmó esta regla y señaló los límites de la influencia sindical a nivel político.

■ Los avatares de la difícil transición a la democracia y la contribución del sindicalismo a su consolidación

Pese a sus divisiones internas, que trascendían aspectos tácticos y oponían modelos económico-sociales diferenciados, el grueso del sindicalismo desempeñó prácticas políticas

significativas durante la transición democrática iniciada en 1983 y particularmente en el período 1987-1992. El grueso del sindicalismo justicialista, a nivel nacional, asumió la derrota electoral de 1983, dedicándose a preservar sus organizaciones, evitar la embestida del gobierno de Alfonsín y ratificar su hegemonía corporativa en las elecciones sindicales de 1984. Para ello se reunificó, oponiéndose con éxito a la Ley Sindical propuesta por el Ministro de Trabajo, Antonio Mucci, gremialista radical, destinada a atomizar el movimiento sindical. Al mismo tiempo la CGT abandonó la arena política de primer plano, actuando sin estridencias en la renovación interna del Partido Justicialista.

Luego, la organización sindical liderada por Saúl Ubaldini participó de la Mesa de Concertación convocada por el gobierno radical a partir de 1984, constatándose la grave dificultad de acordar un pacto social consensuado con el Estado y las organizaciones empresariales. A partir de la imposición del Plan Austral los intentos de concertación se diluyeron y se acentuó la acción opositora de la CGT hacia la política económica del gobierno alfonsinista. Los paros y las concentraciones masivas convocadas por la central obrera convirtieron a Ubaldini en la principal figura opositora, quizás por falencia de la dirigencia política del PJ. Una vez más, de forma indirecta, el sindicalismo transformaba al justicialismo en el portavoz de los sectores populares, duramente castigados por la prolongada penuria económica y por una elevada inflación que deterioraba gradualmente los salarios desde 1976.

En los dos últimos años de gobierno radical la CGT fue normalizada bajo la dirección de Ubaldini, apoyado por las tres tendencias internas que habían sido legitimadas por elecciones sindicales generales. El sindicalismo brindó su apoyo incondicional a la estabilidad democrática y, en consecuencia, repudió francamente los diversos motines militares que se sucedieron desde la Semana Santa de 1987, pese a las distancias que podían separarla del alfonsinismo. La conducción nacional de la CGT rechazó todo acercamiento hacia el golpismo “carapintada”. Sólo pocos sindicalistas aislados

de segunda línea mantuvieron contactos políticos asiduos con esa nueva forma de militarismo. Lo mismo sucedió con el conjunto del peronismo, lo que contribuyó al fracaso relativo de los intentos sediciosos.

La otra actitud política significativa del sindicalismo en esos años fue la firme oposición de los sectores ubaldinista, confrontacionista y negociador a la política económica del alfonsinismo. Esa oposición contribuyó a deteriorar el Plan Austral y sus sucedáneos debido a las negociaciones paritarias exitosas de los metalúrgicos y de otros sindicatos grandes. También perdió credibilidad el Estado, como consecuencia de la propia movilización social que canalizaba la CGT, aun sin salirse de los márgenes de la legalidad. La defección de la posición opositora del sector participacionista, que se incorporó al gobierno radical mediante el control del Ministerio de Trabajo en 1985, pareció neutralizar la acción cegetista, y debilitar la estrategia seguida hasta entonces por la CGT. Sin embargo, el triunfo de los justicialistas opositores en las elecciones de septiembre de 1987 abrió la esperanza de que el peronismo generase un plan económico alternativo y viable, diferenciado del sostenido por el radicalismo. En ese momento, el triunfo del Dr. Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires y su liderazgo nacional habían sido gestados por la política del sector confrontacionista y sus aliados de la CGT, pero es posible que los “peronistas renovadores” no quisieran asumir esa “deuda” política implícita con el sindicalismo, temerosos que el desprestigio de algunas figuras gremiales afectaran sus chances electorales futuras. Estas diferencias político/sindicales facilitaron el ascenso del gobernador riojano Carlos Menem en la estructura partidaria justicialista y la extensión de su heterogénea alianza al interior de la CGT. El sector negociador se inclinó por el discurso basado en la justicia social y la afirmación nacional que predicó el Dr. Menem, cuya victoria en las elecciones internas del PJ en julio de 1988 significó un serio revés para la “renovación” peronista, de la cual no pudo reponerse. Casi todas las nuevas figuras renovadoras terminaron alineándose tras el caudillo riojano y, en pocos meses, se diluyó la

conformación de un partido moderno de tipo socialcristiano o socialdemócrata, con base obrera⁴. El caudillo riojano impuso su concepción movimientista, alrededor de su indudable carisma, postergando por tiempo indefinido la transformación del justicialismo en un partido político participativo y orgánico.

Los dirigentes cegetistas pudieron imaginar que el menemismo les devolvería un rol corporativo significativo en su esquema de poder. Sin embargo, desde la campaña electoral se observó que Menem compartía con algunos “renovadores” cierta desconfianza hacia el sindicalismo y pretendía atribuirle un rol subordinado al Estado o a su conducción política. Por otra parte, la derrota “renovadora” en el ámbito político no se trasladó al plano sindical. En 1988-1989 no hubo ninguna elección gremial significativa en la que dirigentes tradicionales fueran desplazados por listas opositoras que rejuveneciesen las estructuras cegetistas, salvo en pocos y pequeños sindicatos, como el de los empleados judiciales de la Nación.

A partir de la asunción del Presidente Menem, las presiones inflacionarias del bloque económico dominante forzaron su viraje a una política económica neoliberal en 1990. Su abandono de los principios justicialistas esenciales produjo actitudes políticas divergentes del sindicalismo. En principio una cierta resistencia abierta o encubierta a aceptar la disciplina partidaria condujo a la división de la CGT, hecho que no se había registrado en los anteriores gobiernos justicialistas, ni siquiera durante el turbulento mandato de Isabel Perón. Sin embargo, tal resistencia de la CGT fue menos activa y eficaz que la desplegada contra la dictadura o contra el gobierno radical, cuyos planes económicos fueron socialmente menos costosos que el implementado por el Ministro de Economía del Presidente Menem, Domingo Cavallo. Ello resulta explicable por diversas razones. Una de ellas, la existencia de una identidad política común entre el Presidente y la mayoría de los sindicalistas que se proclamaban justicialistas. Otra, el terrible impacto de la hiperinflación de 1989-1990, que

destruyó las esperanzas en la aplicabilidad de modelos económicos alternativos al de los ajustes controlados por el Fondo Monetario Internacional. También vale anotar el grado de aceptación que conservó el presidente Menem, ratificado en las elecciones de 1991 y 1993 y la falta de proyectos políticos alternativos que ofrecieran a la sociedad un grado de credibilidad significativo. En fin, la prevalencia del “síndrome de 1975”, derivado de la hipótesis que la agitación sindical destruyó el gobierno constitucional de Isabel Perón, es decir que la dictadura de 1976 podría haber sido evitada con una cuota de mayor responsabilidad por parte de la dirigencia sindical.

Con todos estos matices, es llamativa la “cierta resistencia” ofrecida por el confrontacionismo o el propio sector negociador al liderazgo de Menem. Por el contrario, en el ámbito político partidario fueron menos numerosos los dirigentes que se opusieron públicamente a las opciones personales del presidente Menem, convencido que la opción neoliberal era la única posible. La excepción fue el grupo de ocho diputados que generó el Partido Frente Grande.

Una pérdida creciente de influencia en las decisiones del Estado y del Partido Justicialista abarcó a todo el sindicalismo, incluidos los sectores que apoyaron casi sin objeciones el “pragmatismo menemista”. Con la reestructuración ministerial de enero de 1991, el Ministerio de Trabajo dejó de ser dirigido por un gremialista y ese mes, el ministro Porto limitó la influencia de los sindicalistas en la ANSSAL.

La oposición sindical contra los efectos anti-sociales de la política neoliberal, semejante a la de 1976, condujo a la formación de dos nucleamientos críticos de la conducción de la CGT. De una parte, en 1992 se creó el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) que cuestionó la vinculación CGT-Estado y el modelo sindical peronista, alejándose de la central sindical única y formando una organización alternativa. Esta agrupó sindicatos de empleados del Estado (ATE) y maestros (CTERA), duramente golpeados por la “reforma-desguace” del Estado

4 La nueva derrota de Cafiero en el plebiscito bonaerense de 1990 marcó el final de esa esperanza.

impuesta por el neoliberalismo. Sus definiciones fundacionales le permitieron incorporar a sindicatos, seccionales, movimientos sociales reivindicativos diversos e individuos, con una estructura de amplio debate y selección democrática de sus dirigentes.

Luego, bajo la conducción de Víctor De Gennaro (ATE) se fundó la Central de Trabajadores Argentinos, paralela a la CGT, la cual agrupó sectores confrontacionistas y combativos, los cuales fueron creciendo desde los años noventa. La CTA se constituyó en la primera organización que realizó movilizaciones contra el proyecto neoliberal desde 1994 y, aliada a otras agrupaciones sindicales, hostigó a los gobiernos de los Presidentes Menem y De la Rúa por sus políticas económicas y sociales. Con la integración de desocupados y de su original movimiento de piqueteros, la CTA escribió una página novedosa en la historia sindical, lo mismo que la exitosa “carpa blanca” de los maestros que estigmatizó la destrucción educativa neoliberal durante el segundo gobierno de Menem. La ilusión despertada por el gobierno de la Alianza UCR-Frente Grande duró pocas semanas en las filas de la CTA. El proyecto de crear un “Partido de los Trabajadores”, semejante al brasileño, se incubó entre sus componentes heterogéneos, sobre todo después del colapso del modelo neoliberal a fines de 2001 y enero de 2002.

En paralelo con el surgimiento de la CTA, otro nucleamiento sindical nació en esos años. En 1994, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) se propuso “reconquistar” la CGT para una línea confrontacionista consecuente con la tradición ideológica peronista de justicia social. Con la conducción de Hugo Moyano (camioneros) y Juan M. Palacios (transportes), esta parcialidad abarcó un tercio de los sindicatos que formaban la CGT y, en 1996, tras la exitosa huelga unitaria del 8 de agosto, consiguió que el Secretario General Gerardo Martínez (construcción) convocase un Congreso de la CGT que promovió a Rodolfo Daer (alimentación) para dirigir la central sindical, ubicando a Palacios como Secretario Adjunto. Luego el MTA apoyó la candidatura del Dr. Eduardo Duhalde, quien prometía abandonar la convertibilidad monetaria, pieza

clave del esquema neoliberal y luego lideró la lucha contra la Ley de Reforma Laboral que el gobierno de Fernando De la Rúa dictó para reforzar la flexibilización laboral, impuesta de hecho en la década anterior pero cuya sanción legal era reclamada por la patronal y por el Fondo Monetario Internacional. El escándalo que desató la presunta existencia de “compra de votos” de senadores justicialistas condujo a la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez y marcó el principio del fin de la frustrada experiencia aliancista.

En 1995, las elecciones presidenciales habían acentuado las divisiones políticas entre la CGT, que apoyó la candidatura del presidente Menem, y el MTA y la CTA que, oficiosamente, respaldaron la postulación del FREPASO, es decir la fórmula José O. Bordón-Carlos Álvarez. La reelección de Menem, obtenida con casi el 50% de los sufragios, alentó un replanteo en el interior de la CGT, que condujo a la convocatoria a un Congreso que reemplazó al secretario general, Antonio Cassia, visualizado como demasiado subordinado a la conducción menemista, por Gerardo Martínez (construcción), apoyado por las “62 Organizaciones”. Su sustitución por Rodolfo Daer, en septiembre de 1996, profundizó cierto rechazo de las políticas neoliberales y le permitió a la CGT bloquear el desmantelamiento del sistema de Obras Sociales deseado por el sector patronal. Fue y sigue siendo la existencia de prestaciones de salud un factor fundamental de la fortaleza de un sindicalismo debilitado a nivel global y local. Esa fuerza se expresaba en el sostenimiento de una tasa de sindicalización de más del 30% de la PEA durante la década de los noventa.

La ineficacia del gobierno del Presidente Fernando de la Rúa para salir gradualmente de la convertibilidad monetaria generó una alianza de sectores productivos industriales y rurales que tuvo repercusión en las principales figuras políticas peronistas, radicales y del Frente Grande. Entonces se puso fin a la presidencia de un dirigente deslegitimado por las elecciones de octubre de 2001. La forma poco prolija de forzar la renuncia de de la Rúa fue “reparada” porque el Parlamento terminó eligiendo a Eduardo Duhalde, la cabeza

política de dichos sectores productivos, con el apoyo del radicalismo alfonsinista y la mayoría de los gobernadores.

El período de confrontación social generalizada entre fracciones del poder económico y entre los sectores socialmente incluidos y los excluidos generó un período de alta volatilidad e inestabilidad. La banca y las empresas privatizadas demandaban la dolarización para mantener una economía abierta al mundo. Duhalde nombró como ministro a Roberto Lavagna, economista heterodoxo que acordaba con una cierta protección de la industria nacional, logrando que la economía comenzase a reactivarse a partir de julio de 2002.

Los partidos en estado de crisis y los políticos desprestigiados debieron convocar a elecciones anticipadas en 2003, con una gran dispersión de candidatos y de electores. Fue significativo que el ex-Presidente Menem obtuviese la primera minoría con 25% de sufragios y que el candidato apoyado por el Dr. Duhalde, el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner, llegase a la segunda vuelta con poco más del 22%. El rechazo de los sectores medios a la figura del líder riojano hizo posible que él abandonase la segunda vuelta y que Kirchner fuese ungido Presidente.

Desde mayo de 2003 sólo Presidencias decisionistas podían gobernar una sociedad desorientada y fragmentada a través de una política económica y social que restableciese la regulación del Estado y la restauración del Estado de Derecho, seriamente dañado desde 1976. Las opciones económico-sociales que se adoptaron entonces abrieron una compleja lucha contra intereses concentrados nacionales e internacionales (el sector financiero y las empresas privatizadas, entre otros). A algunos grupos se les hicieron concesiones y a otros se los limitó severamente. Afrontar esta tarea condujo al Presidente santacruceño y a su esposa y sucesora, Cristina Fernández, a conflictos con diversas corporaciones que ejercen poder económico e ideológico en el país.

Podemos constatar que las diversas tendencias sindicales acentuaron, antes y después del 2002-2003, ciertos caracteres de su proyección política histórica. La corriente participacionista dirigió la CGT-San Martín y luego la CGT reunificada desde 1990 hasta 1995 y conservó un rol dirigente significativo hasta el año 2004; al acentuar sus rasgos de “vinculación corporativa” con el Estado durante los años noventa, ello les acarreó una pérdida de credibilidad política dentro y fuera del justicialismo. En su seno se encontraban figuras sindicales que recibían fuertes cuestionamientos que trascendían su comportamiento político, siendo objeto de un repudio generalizado hacia sus personas. El caso del dirigente Jorge Triacca (que fue ministro del primer gobierno del Dr. Menem) fue el más conspicuo de una corriente en la que se alinearon sindicatos que lograron un rol empresarial creciente, en conformidad con el modelo neoliberal. La derrota electoral del Dr. Menem en 2003 suscitó divisiones y reacomodamientos en el interior de esta corriente, que permaneció en la CGT reunificada. Recién en 2008 se produjo su reaparición formal con la creación de la CGT Azul y Blanca que se alejó de la conducción de la CGT. Esta fracción es el brazo sindical del peronismo disidente, surgido tras el conflicto entre el gobierno y la Mesa de Enlace agropecuaria⁵ en el primer semestre de 2008.

La corriente sindical negociadora, encarnada por la Unión Obrera Metalúrgica⁶, intentó vanamente fortalecer y ampliar su vinculación estructural con el Partido Justicialista durante los años noventa, tratando una y otra vez de revitalizar “las 62 Organizaciones” como rama política del sindicalismo peronista. En 1995, esta vertiente recuperó una influencia decisiva en la conducción de la CGT, tomó distancia de las corrientes afines al menemismo, llegó a aliarse con el MTA⁷, y apoyó la candidatura presidencial del Dr. Eduardo Duhalde en 1999. Por su poder de negociación con las cúpulas partidarias, incluso con la “menemista”, siguió

5 Este sector está ahora liderado por Luis Barrionuevo (del sindicato de gastronómicos), y se mantiene ligado al ex vicepresidente Dr. Eduardo Duhalde por su común oposición política hacia el gobierno actual.

6 Antes y después de la muerte de su Secretario General Lorenzo Miguel.

7 También promovió al dirigente del Sindicato de la Alimentación Rodolfo Daer como Secretario General de la CGT.

siendo el sector sindical más influyente hasta el 2004. Desplazado de la dirección cegetista por la fuerza del sindicalismo de servicios, liderado por el sindicato de Camioneros, el sector negociador se mantuvo aliado a esa corriente y fue favorecido por la revitalización industrial, iniciada en 2002 y que se fortaleció durante el gobierno del Dr. Néstor Kirchner. Asimismo apoyó la recuperación de la influencia política de la rama sindical en el PJ⁸

La corriente confrontacionista, que se opuso al gobierno del Dr. Carlos Menem, permaneció paralizada hasta 1994. El mencionado MTA⁹ fue la expresión de la reacción del gremialismo cegetista y peronista contra las políticas neoliberales y la fuerza más importante que predicó la defensa de la producción nacional durante los años noventa. Carente en esa época de presencia estructural partidaria de significación, esta corriente sindical quedó aislada de la conducción del justicialismo que apoyaba al gobierno del Dr. Menem. Luego, el fracaso electoral de Saúl Ubaldini¹⁰ le significó un duro revés político que condujo a la búsqueda de una reubicación en el interior del sindicalismo, buscando alianzas con las posturas de la corriente negociadora y también con la CTA, desde 1995 hasta el fin de la convertibilidad. En las elecciones de 2003 el MTA apoyó la candidatura del Dr. Adolfo Rodríguez Saá, un reflejo de la dispersión del voto peronista y de la desorientación de los diversos sectores sociales en un escenario de fragmentación política. La alianza con el gobierno del Dr. Néstor Kirchner se produjo cuando el Presidente electo ratificó una política económica heterodoxa, lo cual allanó la elección del líder del MTA como Secretario General de una CGT formalmente unida un año después. La sólida política laboral del gobierno nacional iniciada en 2003 legitimó al dirigente camionero frente a la mayoría de las organizaciones sindicales.

Por último, el sindicalismo combativo configurado por diferentes corrientes, algunas incluidas

en la Central de Trabajadores Argentinos y otras integradas a partidos clasistas marxistas, se nutrió de desocupados que se organizaban en los años noventa y, después de 2003, de comisiones internas de trabajadores radicalizados. Su renacimiento actual es el producto del ambiente democrático que se instauró después de 1983 y del mejoramiento de la situación laboral en los últimos años.

■ Conclusiones

En el caso del sindicalismo argentino, se pueden observar dos grandes “momentos” histórico-políticos e ideológicos, al menos hasta el presente.

Hasta 1945, la organización del movimiento obrero fue limitada numéricamente y dificultada por las divisiones ideológicas. Muchos de sus dirigentes, de origen extranjero, estaban influidos por las corrientes de pensamiento que habían nacido en el curso de las luchas sociales europeas, no siempre adaptadas a la realidad de un país periférico como la Argentina. Pero esas ideologías, imbuidas de un fuerte contenido utópico, aseguraban un alto nivel de idealismo y de entrega a los objetivos de transformación social por parte de esos dirigentes¹¹.

El Estado combatió y marginó a los sindicatos durante un largo período, hasta terminar aceptándolos como personas jurídicas de derecho civil no muy diferentes de otras asociaciones voluntarias como las de los clubes de fútbol. Los partidos políticos obreristas (Socialista y Comunista) trataron de conducir al sindicalismo pero, en general, lo lograron muy parcialmente, puesto que la mayoría de las organizaciones obreras no adhirieron a ellos y ni siquiera los afiliados los votaban masivamente. Por ello, tuvieron importancia predominante primero los anarquistas, alérgicos a toda forma partidaria y luego, los sindicalistas “puros”, algunas veces próximos de

8 Apoya actualmente el liderazgo del actual Secretario General de la CGT.

9 Estaba conducido por el Secretario General del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.

10 Antes había sido desplazado de la conducción de la CGT en 1990.

11 Un caso ejemplar fue el de José Domenech, ferroviario y secretario general de la CGT entre 1937 y 1943, quien volvió a su puesto de trabajo en un taller de los ferrocarriles una vez terminado su mandato.

los socialistas pero reacios a aceptar la disciplina que implica un alineamiento partidario. En todo este período, un abismo separaba a los sindicatos de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia y de otros grupos de presión de las clases dirigentes. Los empresarios los aceptaron con renuencia como interlocutores válidos, sobre todo en la medida en que no había una legislación que los obligara a negociar con los representantes obreros.

Después de 1945, la organización sindical, impulsada y patrocinada por el Estado, adquirió la complejidad de toda estructura social de masas, con importantes recursos económicos, con el manejo de obras sociales de creciente tamaño y con una burocracia dirigente rentada por sus organizaciones. Pese a las rupturas institucionales de 1955, 1966 y 1976 y las ofensivas estatales anti-sindicales de 1955-1957, 1967-1969 y 1976-1980, la organización gremial promovida durante el peronismo continúa vigente hasta nuestros días. Sus relaciones con el Estado fueron cambiantes y conflictivas pero estrechas. Por un lado, el Estado tendió permanentemente a limitar la autonomía sindical, sea en gobiernos democráticos o dictatoriales, mientras un sector del movimiento obrero siempre propugnó por conservar un cierto grado de independencia frente a cualquier forma de poder estatal. Lo mismo sucedió en el interior del movimiento peronista y, en particular, en las relaciones no siempre fluidas entre los sindicalistas y Perón quien para consolidar su liderazgo político inicial buscó impedir la consolidación del Partido Laborista en 1946 y más tarde cortó las ambiciones del dirigente sindical más importante de la época, el metalúrgico Augusto Vandor, que parecía orientarse a una fórmula política alternativa. La ideología peronista interpretada por los gremialistas adquirió una forma de pragmatismo ubicuo. A medida que los dirigentes formados en la militancia sindical antes de 1945 fueron siendo relevados, esa ideología les permitió sobrevivir en un contexto social adverso en el que prevalecía una percepción de los gremialistas en la opinión

pública que acentuaba la valoración negativa de la conducta ética de una parte minoritaria de aquellos. Sin embargo la principal obra organizativa del General Perón fue la CGT y, gracias a ella y a sus luchas, perduró el peronismo. Más aún, el nacionalismo justicialista y la desconfianza hacia las ideologías históricas del sindicalismo condujeron a una desvinculación del movimiento obrero argentino respecto de todas las “internacionales sindicales”, por lo menos hasta los años setenta.

Por otra parte, la influencia de la CGT como factor político fue mucho mayor que en el pasado. Ello se debió a su relativa unidad, la cual se mantuvo incólume pese a muchas vicisitudes sufridas hasta 1989, quizás por la fuerza aglutinante de la ideología peronista, a las relaciones establecidas coyunturalmente por los sindicalistas con otros grupos de poder como la Iglesia y los militares y al *imperium* de la ley que, otorgándole personería gremial, obligó a los patrones a negociar con los representantes obreros, creando una nueva mentalidad que parece irreversible.

Estas dos etapas político-ideológicas no se contraponen sino que se complementan. La historia del movimiento obrero es una y no podrían comprenderse sus logros en materia de legislación social y de dignificación del trabajo sin remitirnos a los románticos orígenes de las luchas sociales en la Argentina.

La organización obrera contribuyó decisivamente a profundizar la democracia en el mundo, participando en los múltiples frentes de perfeccionamiento social, juntamente con otros movimientos sociales y creó mecanismos que derribaron muros que dificultaban niveles mayores de solidaridad e igualdad. La Argentina no es una excepción a esta regla.

El bajo índice de aceptación que las encuestas reservan a los sindicalistas puede explicarse en parte por tendencias generales en las sociedades capitalistas contemporáneas. Sin embargo, en nuestro país, esa falta de prestigio gremial¹² se debe a una incansable campaña de descrédito iniciada en los años cincuenta, al romperse el pacto social

12 Ella es comúnmente sostenida por la amplificación que hacen los medios hegemónicos en la opinión pública de algunos minoritarios pero notorios hechos de corrupción en el manejo de los recursos sindicales y o de las Obras Sociales.

impuesto por el peronismo clásico. Pese a ello subrayamos que el sindicalismo contribuyó de manera sustantiva a la transición democrática desde 1983, trascendiendo sus divisiones, contradicciones y debilidades. Ello se expresó a través de su canalización de los conflictos sociales y de su interacción con los partidos y con el Estado, asumiendo las reglas de juego democráticas y manteniendo la convicción que será posible un pacto social con el Capital que la Argentina no ha podido lograr. Puede preverse que este comportamiento no se alterará de manera significativa si el Estado supervisa con éxito las relaciones laborales, tal como sucede desde el año 2003.

■ Bibliografía

Existen diversas obras de historia sindical argentina, generales o parciales, que desarrollan los temas que nos hemos permitido esbozar. Citamos sólo algunas de ellas, pero deseamos reconocer la enorme contribución de Santiago Senén González al conocimiento documentado y objetivo de una realidad poco o mal estudiada desde ámbitos académicos. El Centro de Documentación que lleva su nombre e instalado en la Universidad Di Tella es parte de su obra y facilitará estudios rigurosos de la historia reciente. Senén González reconstruyó la historia sindical en varios libros anteriores y realizó una síntesis actualizada en la Colección "Claves del Bicentenario". Ver *Breve Historia del Sindicalismo Argentino*, de Santiago Senén González y Fabián Bosoer, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 2009.

■ Otros autores y títulos:

- Belloni, Alberto, *Del anarquismo al peronismo* (Historia del Movimiento Obrero Argentino). Ed. La Siringa, Buenos Aires, 1960.
- Cerrutti Costa, Luis, *El sindicalismo. Las masas y el poder*. Ed. Tráfac, Buenos Aires, 1957.
- Campo, Hugo del, "Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de una vinculación permanente". CLACSO, Buenos Aires, 1983.
- Cavarozzi, Marcelo, "Sindicatos y política en Argentina 1955/1958". Est. CEDES, Vol. 2, N° 1, Buenos Aires, 1979.
- Godio, Julio, *Historia del movimiento obrero argentino (1880/1910)*. Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1973.
- Iscaro, Rubens, *Historia del movimiento sindical*, Ed. Ciencias del Hombre, Buenos Aires, 1973 (4 volúmenes).
- Marotta, Sebastián, *El movimiento sindical argentino*. Ed. Lacio, Buenos Aires, 1961 (1857-1920).
- Matsushita, Miroshi, "Movimiento obrero argentino. 1930-1945". Hyspamérica, Buenos Aires, 1983.
- Rotondaro, Rubén, *Realidad y cambio en el sindicalismo*. Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1971.
- Spalding, Hobart, *La clase trabajadora argentina (1890/1912)*. Ed. Galerna, Buenos Aires, 1970.
- Zorrilla, Rubén, *Estructura y dinámica del sindicalismo argentino*. Ed. La Pléyade, Buenos Aires, 1974.
- La Colección "Biblioteca Política Argentina" del Centro Editor de América Latina (CEAL) publicó entre 1983 y 1985 varios trabajos sobre el sindicalismo; ellos llevan los números 27, 28, 36, 43, 44, 50, 53, 60, 71, 80, 85, 86, 97, 98, 101, 106, 107 y 113 de dicha colección.

